

Consideraciones sobre el populismo latinoamericano

ERNESTO LACLAU pp. 115-120

En este documento quiero debatir brevemente el modo en que algunas categorías centrales discutidas tanto en el artículo que se presenta en esta revista como en mi libro *La razón populista* pueden vincularse a la experiencia latinoamericana. Comencemos por la categoría de «demanda». Según hemos afirmado, la forma de articulación política de las demandas depende de su inserción en contextos institucionales específicos que pueden satisfacerlas o frustrarlas. Ahora bien, sería un error presuponer que este contexto institucional es unificado y cubre uniformemente todo tipo de demandas. En la experiencia latinoamericana, el primer dato a tener en cuenta es la extrema regionalización, que introduce una fragmentación que afecta no sólo los canales de vehiculización de las demandas sino también la posibilidad de establecer entre ellas cadenas equivalenciales. Comparemos, por ejemplo, los clásicos casos de populismo en Argentina y Brasil. En Argentina, el elemento regional ocupa un lugar secundario. Por eso es que Juan Domingo Perón, como líder populista, pudo tener desde el comienzo un discurso de dimensiones nacionales, ya que la vasta mayoría de la población —étnicamente homogénea— se concentraba en el triángulo de las grandes ciudades industriales de Buenos Aires, Córdoba y Rosario. Vargas, en Brasil, nunca contó con las mismas facilidades, por cuanto el país era una federación de oligarquías locales que lo reducían a ser el articulador de fuerzas en buena medida autónomas. Había límites estructurales que conspiraban contra la formación de un Estado nacional altamente centralizado, y en el único momento en que un discurso centralista intentó desafiar el poder del *statu quo*, que fue durante el gobierno de Goulart, la limitación de la base política de ese proyecto se reveló muy rápidamente y condujo al golpe de 1964.

Todo estudio de la emergencia de rupturas populistas debe abordar, sin embargo, no solamente los espacios que limitan o expanden la posibilidad de cadenas equivalenciales, sino también la naturaleza de los canales a través de los cuales las demandas pueden ser absorbidas. Aquí el fenómeno uniforme en el conjunto de la historia del continente es la presencia del clientelismo, que puede asumir características burocráticas —como en el Perú de Leguía— o privadas, como en la Argentina anterior a la década de los treinta. Cuando

esto último ocurre, la ruptura populista se expresa a través de una extensión y reafirmación de la intervención estatal, en tanto que en el clientelismo prevalece una sustitución de elites.

Consideremos un momento el caso argentino. Antes de la crisis de 1930, la base de la vida política se organizaba en torno a una de las formas más clásicas de clientelismo: el intercambio de votos por favores. En un país en donde el sistema de seguridad social estaba escasamente desarrollado, esta mediación política era esencial. Conseguir una cama de hospital, por ejemplo, la requería. El nivel más bajo de negociación era el de los llamados «punteros», que controlaban los votos en una zona reducida; por encima de ellos estaban los «caudillos» que controlaban todo un barrio, y los candidatos a diputados o senadores tenían que negociar con ellos y satisfacer, al menos parcialmente, sus demandas. Lo esencial, para nuestro argumento, es que la satisfacción meramente individual de las demandas impedía que entre ellas se formaran cadenas equivalenciales. Este sistema piramidal comienza a desintegrarse con la crisis económica de 1930. El Estado puede satisfacer cada vez menos las demandas de las bases y se da así una típica situación prepopulista: una acumulación de demandas insatisfechas y un aparato institucional cada vez menos capaz de vehicularlas. Esto crea una situación de descontento generalizado, una equivalencia difusa entre todos los reclamos frustrados y, finalmente, la emergencia de un líder que por fuera y contra el aparato institucional convoca a las masas a la acción política. La intervención de Perón, fundada en la expansión del rol de los sindicatos, quiebra la columna vertebral del viejo sistema clientelístico. Los punteros, sin desaparecer, ven su papel restringido: para seguir con el ejemplo, ya no es necesaria su intervención para conseguir una cama de hospital, porque está el hospital sindical.

Si continuamos analizando los límites estructurales a la expansión de lógicas equivalenciales —y, por consiguiente, a la emergencia de rupturas populistas—, un aspecto importante a tener en cuenta es la forma en que la posibilidad del populismo es afectada por la fragmentación de su base social. Esto es especialmente importante en los países de fuerte concentración indígena y campesina. Evidentemente los *tempos* de movilización del campesinado son distintos de los de las masas urbanas y los de los trabajadores de un enclave minero. Esto crea una situación compleja que puede dar lugar a fenómenos muy diversos. Uno de ellos es un estallido de violencia por parte de un sector aislado que, a causa de este aislamiento, no transmite (en nuestra terminología, no establece relaciones equivalenciales) a otros sectores que serían sus potenciales aliados. Este desarrollo desigual implica que la confluencia de todos ellos en una unidad ruptural es un fenómeno más bien excepcional. La revolución boliviana de 1952 fue una de estas excepciones, pero una asincronía en los procesos de movilización es más bien la regla. Lo que, en todo caso, debe señalarse, es que ninguna movilización populista puede tener éxito —o incluso constituirse

como tal— sin la presencia protagónica de las masas urbanas. ¿Por qué? Porque están más cerca del centro del poder y sus actos adquirirán una visualización nacional más rápida, en tanto que una movilización puramente campesina puede ser aislada y reprimida más fácilmente. Pero, una vez que la movilización urbana ha comenzado, sus efectos en cadena pueden transmitirse a las zonas rurales. La idea de un foquismo rural puro es un mito. La Revolución Cubana, por ejemplo, jamás podría explicarse en términos exclusivos de una movilización autónoma del campesinado, pese a que su escenario principal fueron las áreas rurales.

Hemos hablado hasta ahora de demandas sociales, sus canales de vehiculización y la lógica equivalencial que, en el populismo, tiende a articularlas. Debemos ahora referirnos al momento simbólico en torno al cual las cadenas equivalenciales plasman su unidad. Este es el momento de constitución del pueblo como voluntad colectiva y, a su vez—puesto que el discurso populista siempre dicotomiza los espacios sociales— el momento en que el adversario recibe su identidad simbólica unificada. Para entender los contenidos simbólicos que, en América Latina, fueron asociados a ambos campos, debemos introducir una perspectiva histórica. Los estados latinoamericanos se constituyeron en la segunda mitad del siglo XIX en torno a oligarquías cuya base económica fue esencialmente agroexportadora y cuya forma política dominante fue el liberalismo. El mismo éxito de su inserción en el mercado mundial condujo a un rápido proceso de urbanización y a la emergencia de sectores medios que, hacia la segunda mitad del siglo XX, comenzaron a exigir una participación creciente en el sistema político. Es importante advertir que esta protesta no cuestionaba en forma alguna la forma liberal del Estado, sino que reclamaba la ampliación de sus bases sociales. De ahí la emergencia del típico reformador de clase media—Irigoyen en Argentina, Battle y Ordóñez en Uruguay, Alessandri en Chile, Madero en México, Ruy Barbosa en Brasil, entre otros— cuyos reclamos cristalizaban en lemas formales: «sufragio efectivo y no reelección» demandaba Maderos; «mi programa es la Constitución Nacional», afirmaba Irigoyen. El populismo que estas expresiones antioligárquicas podían promover era, por consiguiente, muy limitado. El momento ruptural no ponía en cuestión el tipo de régimen. Fue sólo después de la crisis de los años treinta que las posibilidades de una reforma interna del Estado liberal-oligárquico se revelaron como ilusorias, por lo que, en los años treinta y cuarenta, asistimos a la emergencia de rupturas populistas más radicales, como el peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil o el MNR en Bolivia.

¿Cuál fue el momento ideológico de los «pueblos» constituidos por ese populismo, y cuál el horizonte que determinó la identidad del enemigo? La dicotomización operó a través de una división antagónica entre liberalismo y democracia. ¿Cómo tuvo lugar esta división? Es necesario entender que ambos términos no están inexorablemente ligados, sino que su articulación es el resultado de un largo y complejo proceso histórico. En Europa, a

comienzos del siglo XIX, el liberalismo era una doctrina eminentemente respetable, en tanto que «democracia» era un término peyorativo, identificado con el gobierno de la turba y el jacobinismo. Se requirió todo el largo proceso de revoluciones y reacciones del siglo XIX para que finalmente se estableciera, entre liberalismo y democracia, una relación de implicación relativamente estable. En América Latina esta articulación nunca se logró plenamente. Las oligarquías liberales fueron cada vez más incapaces de absorber institucionalmente las demandas democráticas de las masas. Por consiguiente, si el liberalismo se presentaba como el horizonte que daba su unidad al campo oligárquico, los símbolos democrático-populares debían presentarse como formalmente antiliberales. Esto creó una permanente divisoria de aguas en la experiencia latinoamericana entre la tradición liberal y la tradición nacional popular. Regímenes antiliberales (que en ciertos casos fueron dictaduras militares nacionalistas) encarnaron este momento democrático disociado de la articulación liberal. Piénsese, por sólo un ejemplo, el proceso que, del «año veinte» y el Fuerte Copacabana, lleva en Brasil, pasando por el tenentismo y la Columna Preste, a la revolución de 1930 y al Estado Novo.

¿Al presente, dónde nos deja este proceso? Es necesario entender que América Latina hoy es heredera de dos procesos profundamente traumáticos que han afectado su historia en los últimos treinta años. El primero es la experiencia de algunas de las dictaduras más represivas y brutales del siglo XX, que dismantelaron los sistemas institucionales de los países en las que tuvieron lugar y que golpearon igualmente a liberalismo y democracia creando, por primera vez, las condiciones históricas para su confluencia. Desde el campo nacional-popular nadie pone hoy en cuestión las llamadas libertades formales, y estas últimas ya no aparecen como totalizadas por un liberalismo antipopular.

La segunda experiencia traumática ha sido la aplicación ortodoxa de las absurdas recetas económicas del neoliberalismo, que condujo a una penuria social inenarrable y en algunos casos, como en Argentina 2001, al colapso del sistema económico. Lo que hemos descrito como acumulación de demandas insatisfechas se multiplicó durante los años neoliberales. El resultado fue una proliferación de movimientos de protesta social, autonomizados del sistema político, pero que, sin embargo, presionaban sobre él para lograr el reconocimiento de sus demandas. Los «piqueteros» en Argentina, los «sem terra» en Brasil y otros movimientos comparables son ejemplos de lo que tengo en mente. Esta es, quizás, la característica más saliente de la situación latinoamericana actual: una enorme expansión horizontal de la protesta social que encuentra, sin embargo, dificultades para transmitir sus reclamos al sistema político. Pero el destino de la democracia en América Latina depende de que estas dos dimensiones logren conjugarse. Venezuela es, quizás, el país del continente en el que esa conjugación ha sido más exitosa, pero otros países como Argentina han avanzado considerablemente en esa dirección. Para ponerlo en nuestros

términos: ningún sistema político es estable si no ha logrado un cierto equilibrio entre las lógicas equivalenciales (la movilización autónoma de las masas) y las lógicas diferenciales (la absorción institucional de las demandas). Todo parece indicar que los sistemas políticos latinoamericanos se están acercando a ese equilibrio. Después de la traumática experiencia neoliberal, el pragmatismo en la política económica —que se manifiesta en una creciente regulación estatal y la participación necesaria en la esfera pública de los sectores movilizados— está conduciendo a ese giro hacia la centro-izquierda que es percibido como uno de los rasgos definitorios de la etapa actual.

Hay un último punto al que debemos referirnos. Todo el análisis de mi libro *La razón populista*, reiterado en el artículo presentado en este número de *Cuadernos del Cendes*, se funda en la afirmación de que los significantes vacíos que unifican una cadena equivalencial son de naturaleza nominal y no conceptual. ¿Por qué es este el caso? Porque una operación conceptual consiste en subsumir bajo una cierta categoría «casos» individuales que comparten algún rasgo positivo común, sin el cual la operación sería ininteligible. Pero las demandas que constituyen una cadena equivalencial no necesitan compartir nada positivo: la equivalencia está dada por su común oposición a un régimen que las niega a todas ellas. Pero si son absolutamente heterogéneas y lo único que las unifica es un rasgo puramente negativo, la operación que las agrupa no puede ser una operación de subsunción y, por ende, el significante vacío en que esa unidad se plasma no puede ser de naturaleza conceptual. Según he intentado mostrar en mi libro, el significante vacío es un nombre y no un concepto y, por tanto, constituye el movimiento político como singularidad. Pero la forma por antonomasia de un nombre (singular) es un nombre propio, lo que explica el rol del líder: en su nombre cristaliza la unidad del movimiento.

Este es, con frecuencia, el punto más controvertido en lo que hace a la evaluación del populismo, aquel en que la cruzada antipopulista hace más hincapié: la centralidad política del líder, ¿no abre las puertas a todo tipo de manipulación y demagogia? Digamos, en primer término, que nuestros conservadores —de izquierda o de derecha— son sumamente selectivos en sus críticas a la centralidad del líder. Es la típica actitud de quienes denuncian la dictadura en Mario pero la condonan en Silla. Se vocifera contra esa centralidad en el caso del populismo, pero en otros casos ella no es el blanco de los mismos denuestos. ¿Podemos imaginar la transición a la Quinta República en Francia sin la centralidad política de la figura de De Gaulle? No es que el líder sea el origen del movimiento, sino que, sin ese punto de aglutinación, el movimiento no podría forjar su unidad, se dispersaría entre los elementos que lo componen. Este es tanto más el caso cuando la fragmentación social es mayor, el proceso de des-institucionalización más avanzado.

Lo que es, sin embargo, verdad, es que entre la centralidad política del líder —y del poder burocrático que lo rodea— por un lado y, por otro, la autonomía de los movimientos

de base, existirá siempre el peligro de una tensión que sólo puede ser resuelta a través de una negociación política incesante. Pero no es cierto que la prevalencia del polo burocrático sea el «destino manifiesto» del populismo. Para dar un ejemplo de un área geográfica distinta: en África el régimen de Mugabe degeneró en un poder burocrático autoritario pero el de Nyerere fue profundamente democrático y consiguió siempre mantener el equilibrio entre la unidad simbólica del pueblo y la autonomía de los movimientos de base. No olvidemos, además, que en América Latina el peligro mayor para la democracia no viene del populismo sino del neoliberalismo. ¿Podemos imaginar las reformas neoliberales de los «Chicago boys» en Chile y de José Alfredo Martínez de Hoz en Argentina sin las dictaduras de Pinochet y de Videla?

Agosto de 2006